

## **SALA SEGUNDA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL**

**Medellín, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno**

Sería menester que la Sala Segunda de Decisión con ponencia del suscrito Magistrado procediera a dictar sentencia dentro del recurso de apelación formulado por la parte demandante frente a la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en el proceso verbal adelantado por EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, REINALDO ANTONIO RENDÓN SEPÚLVEDA, NURY DE JESÚS TABORDA y NATALIA ANDREA RENDÓN TABORDA contra DIEGO ALBERTO SINISTERRA GÓMEZ y la sucesión ilíquida de CARLOS ALBERTO GUARÍN ZAPATA a través de MIRYAM CECILIA MEDINA HERNÁNDEZ y THOMÁS GUARÍN MEDINA; sin embargo, se advierten varias irregularidades que no permiten un pronunciamiento de fondo.

### **1. ANTECEDENTES**

**1.1** Con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 22 de junio de 2012 en el kilómetro 66+915 de la vía conduce de La Pintada al Departamento de Caldas, EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA junto a sus padres y hermana presentó demanda de responsabilidad civil extracontractual solicitando el reconocimiento de los perjuicios patrimoniales y

extrapatrimoniales sufridos con ocasión de las lesiones que le generaron una pérdida de capacidad laboral del 78,25%; contra DIEGO ALBERTO SINISTERRA GÓMEZ como conductor y CARLOS ALBERTO GUARÍN ZAPATA como propietario inscrito del vehículo de placas FAY-484.

- 1.2 Surtida la contradicción de la demanda, se celebró en forma concentrada la audiencia regulada por los artículos 372 y 373 del CGP el 26 y 27 de mayo de 2021.
- 1.3 En el curso de la audiencia y después de intentarse el interrogatorio de parte a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, la parte demandada solicitó se decretara la nulidad desde el auto admisorio de la demanda debido a que se evidenció que el demandante no tiene la capacidad para comprender las preguntas que se le formularon y los documentos presentados para efectos de reconocimiento.
- 1.4 El Juzgado decretó la nulidad mediante auto del 26 de mayo de 2021 frente a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA desde el auto admisorio de la demanda y continuó el trámite con los demás demandantes, arguyendo la existencia de un litisconsorcio facultativo por activa lo que genera la independencia de las pretensiones de cada uno de los demandantes.
- 1.5 El Juzgado fundamentó la declaratoria de nulidad en la falta de capacidad de la víctima directa; según el artículo 159 del CGP es causal de interrupción del proceso la enfermedad grave de la parte y con ello deja de existir el proceso desde que se presenta la enfermedad y hasta el momento en que se restablezcan las condiciones para seguir con el mismo; pero, para que haya interrupción debió darse el nacimiento del litigio, lo cual no acontece en el caso concreto.

**1.6** El artículo 133 del CGP en su numeral cuarto consagra la indebida representación de una de las partes o cuando el apoderado actúa sin poder; en este caso el proceso se estaba adelantando con fundamento en el poder conferido por EDWARD ALONSO RENDÓN partiendo de su presunción de capacidad, la cual ha quedado desvirtuada con las alegaciones hechas por el mismo apoderado.

**1.7** Es evidente la incapacidad del demandante para comprender lo que hace y actuar en el proceso, quedando desvirtuada la capacidad para conferir el poder, deviniendo la incapacidad de la parte demandante – víctima directa - haciendo que no exista el proceso en cuanto a su relación jurídica procesal, dada esa condición; coligiendo que el apoderado carece de poder porque el poderdante no tiene capacidad para conferírsele; en consecuencia anuló el proceso desde el auto admisorio de la demanda con respecto a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA como demandante.

**1.8** La parte demandada interpuso recurso de reposición solicitando que se anule el proceso frente a los demás demandantes, lo cual fue desestimado por el Juzgado al considerar que se trata de relaciones procesales independientes y por ello puede continuarse el proceso con los demás demandantes que tienen la condición de víctimas indirectas.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1 Nulidad por pretermisión de instancia**

El artículo 133 del CGP dispone:

***“El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:***

***1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.***

***2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.***

***3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.***

***4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.***

***5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.***

***6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.***

***7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.***

***8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,***

***cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.***

***Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.***

***PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece.”***

(Subrayas propias).

Para contextualizar lo acontecido en el trámite debe reiterarse que el Juzgado de primera instancia encontró configurada la causal de nulidad contemplada en el numeral cuarto del artículo 133 del CGP, al considerar que la incapacidad evidente de la parte demandante conllevaba a la ruptura de la relación procesal en cabeza suya y con ello a la ausencia de poder en cabeza del apoderado que venía actuando, estimando que EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA no tenía la capacidad suficiente para otorgar poder.

El Juzgado no acató la hipótesis del numeral tercero de la norma referente a la actuación a sabiendas de la existencia de una causal de interrupción o suspensión procesal; fue más allá y arguyó que en este caso no puede suspenderse el proceso debido a que el mismo ni siquiera ha nacido para el codemandante quien sufre una incapacidad notoria.

Frente al punto, esta Corporación no puede pasar por alto esta decisión para continuar con el conocimiento del recurso de apelación que justifica su competencia, toda vez que encarna una irregularidad con la entidad de viciar el resto del trámite y generar una nulidad de naturaleza insubsanable.

Así esta Sala de Decisión, no comparte la interpretación efectuada por el Juzgado al emitir la providencia del 26 de mayo de 2021 que decretó la nulidad de lo actuado frente a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, partiendo de la premisa relacionada con su incapacidad por lo observado en el desarrollo del interrogatorio de parte, generando pretermisión de la instancia frente a este sujeto procesal.

Para dar claridad al asunto, se analizará la decisión de excluir al codemandante del trámite para justificar la causal de nulidad:

### **2.1.1 Desconocimiento de la presunción de capacidad**

Fallido el interrogatorio de la parte por deficiencias en la comprensión de las preguntas y en la interpretación de los documentos, la parte demandada solicitó la nulidad; la argumentación del Juzgado giró en torno a la incapacidad que evidenció en el demandante y de allí coligió que no pudo otorgar poder con el cumplimiento de los requisitos de Ley.

Interpretación y conclusión, que desconoce la presunción de capacidad establecida en el artículo 6 de la Ley 1996 de 2019, al estatuir:

***“Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de***

***condiciones, sin distinción alguna e independientemente si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.***

***En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejecución de una persona.***

***La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.***

***Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará, para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la promulgación de la presente ley, una vez se hayan surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma.”***

En esta misma línea el artículo 8 de la Ley contempla los ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal partiendo del derecho que tienen las personas con discapacidad, mayores de edad, para realizar actos jurídicos de manera independiente; disponiendo el artículo 9 los mecanismos para establecer los apoyos que garanticen la realización de actos jurídicos.

Más allá de lo evidenciado en la audiencia, no obra en el proceso prueba sobre la discapacidad mental absoluta del demandante, apenas yace un dictamen que da cuenta de su alto porcentaje de pérdida de capacidad laboral, no siendo suficiente para colegir que es discapacitado absoluto y para desconocer la presunción legal de capacidad que asiste a todas las personas mayores de edad.

A pesar de ser el punto central de la decisión, el Juzgado desconoció que la apreciación subjetiva y las falencias a la hora de absolver un interrogatorio no son elementos contundentes para calificar a una persona como discapacitada mental, desvirtuar la presunción de capacidad y concluir que no tiene capacidad para comparecer al proceso ni para otorgar poder a quien lo representara en el trámite.

A ello debe aunarse que al momento de presentación de la demanda el demandante no había sido declarado discapacitado mental, no contaba con un guardador designado y en los términos de la nueva legislación no tenía vigente un acuerdo de apoyos para la celebración de determinados actos jurídicos (artículo 19 de la Ley 1996 de 2019) como el hecho de otorgar poder; coligiéndose que podía comparecer al proceso y que el poder conferido reúne los requisitos de Ley; máxime si se tiene en cuenta que se presume la plena capacidad del demandante.

La doctrina ha puntualizado:

***“Es de resaltar que la causal de nulidad también opera cuando el apoderado carece totalmente de poder para actuar en el proceso en representación del demandante o del demandado, dado que en aquellos casos la vulneración del derecho de defensa se hace evidente en la medida que se ha venido obrando en un proceso sin haberse otorgado el respetivo poder para ello, es decir, la voluntad del sujeto para actuar en el proceso a través de un abogado es inexistente y, por ende, la actuación se invalida, toda vez que entrañaría una grave violación al derecho de defensa que una persona que nunca ha otorgado un poder pueda quedar***



***comprometida con las actuaciones de quien no es su mandatario judicial.”<sup>1</sup>***

Al volver la vista sobre las condiciones particulares de este proceso y partiendo de la presunción de capacidad de EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, no puede estimarse que no existió voluntad para actuar en el proceso o para delegar su representación judicial en cabeza de un apoderado; precisamente es esa presunción la que permite dotar de certeza el acto de apoderamiento y su actuación dentro del trámite, tiene capacidad para ser parte (existencia física), capacidad para comparecer (mayor de edad y no ha sido declarado incapaz absoluto) y otorgó en debida forma el derecho de postulación a quien lo representa.

### **2.1.2 Falta de legitimación para alegar la nulidad**

El Juzgado de primera instancia acogió la solicitud de nulidad formulada por quien no estaba legitimada para hacerlo - la parte demandada.

La nulidad por indebida representación busca salvaguardar el derecho de defensa y las garantías procesales de la parte que esta indebidamente representada o por quién han actuado en el proceso sin que medie un poder que lo justifique; es justamente esa persona afectada quien debe alegar la nulidad, no su contra parte.

E inciso tercero del artículo 135 del CGP y la doctrina concluyen que, ***“...únicamente la persona indebidamente representada puede concurrir al proceso y alegar dicha irregularidad con el objeto que se declare la nvalidez de la actuación, pues aquella resulta ser la directamente perjudicada y, por ende, habilitada para obtener la nulidad...”***

---

<sup>1</sup> SANABRIA SANTOS, Henry, *Nulidades en el proceso civil*, 2ª ed. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 3330.

Sólo EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA era el llamado a solicitar la nulidad por no conferir poder a quien presentó la demanda en su nombre y estaba abogando por sus intereses en el proceso; ello no fue así, como se advierte del audio obrante en el archivo 1.7 del cuaderno 2 del expediente digital, la petición vino de la apoderada de los sucesores de DIEGO ALBERTO SINISTERRA GÓMEZ.

El artículo 210 del CGP regula la inhabilidad para testimoniar y con la modificación introducida por el artículo 61 de la Ley 1996 de 2019, eliminó la inhabilidad asociada a la discapacidad de quien se halle interdicto de discapacidad mental absoluta.

Sintetizando, no puede considerarse que estaban dadas las condiciones fácticas y jurídicas para excluir del trámite a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, sin desvirtuar su presunción de capacidad y, en el evento de presentar discapacidad mental, generar los apoyos.

Tampoco puede concluirse que no tenía voluntad para otorgar poder; desconocimiento sus garantías fundamentales lo excluyeron del proceso y se omitió resolver el litigio frente a él.

### **2.1.3 Justificación de la nulidad por pretermisión de instancia**

La nulidad por pretermisión de instancia pertenece a las causales conocidas como insubsanables; en caso de su ocurrencia no le quedan al Juez medidas de remedio o saneamiento para procurar la corrección del trámite que se encuentra adelantando.

Sobre este supuesto, *“cuando se remite el expediente al juez de segundo grado después de casarse un fallo sin que la Corte haya dictado la correspondiente sentencia de reemplazo (...); cuando se casa una*

***sentencia por prosperar un cargo fundamentado en puntos nuevos nunca planteados o discutidos hasta ese momento en el curso de la actuación (...) cuando el superior advierte que el juez de primera dejó de resolver en su sentencia acerca de la demanda de reconvención y, en lugar de devolver el expediente al a-quo para que complemente su sentencia, lo hace en la de segunda instancia.”<sup>2</sup>***

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de enero de 2010 con ponencia del Doctor Pedro Octavio Munar Cadena ha considerado que la pretermisión de instancia por proferirse una sentencia que no se corresponde con las pretensiones incoadas; se configura en aquellos casos en los cuales el Juez resuelve de forma aparente el conflicto sometido a su competencia; profiere una decisión que formalmente pone fin al proceso, pero en el fondo no guarda correspondencia con las pretensiones que marcan el devenir del trámite, las excepciones, las pruebas que se decretaron y practicaron en aras a demostrar los supuestos de hecho alegados al interior del proceso.

En el presente asunto esta Sala Civil advierte la configuración de la pretermisión de instancia, debido a que el Juez al definir el litigio mediante la sentencia proferida el 27 de mayo de 2021 omitió resolver la controversia frente a uno de los demandantes, sin emitir ningún tipo de pronunciamiento frente lo pretendido y ser excluido del proceso tras encontrar acreditada una excepción previa o una causal que permitiera el proferimiento de sentencia anticipada.

Con ocasión de una nulidad que no debió decretarse y frente a la que no se dispuso medida de saneamiento, el Juzgado excluyó del proceso a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA, pretermitiendo la instancia

---

<sup>2</sup> ibídem, p. 260-261

al imposibilitarlo para ejercer contradicción en el período probatorio, alegar de conclusión, interponer recursos y ser destinatario de una decisión que resolviera sus pretensiones declarativas y de condena, sin significar necesariamente que deban salir favorables a sus intereses.

Ello, sin pasar por alto la independencia y autonomía de la que se encuentran dotados los operadores judiciales a la hora de proferir sus providencias; sin embargo, las irregularidades evidenciadas al estudiar el recurso de apelación impiden que esta Corporación seguir adelante con el proferimiento de la sentencia de segunda instancia al excluirse al codemandante del proceso, sin tomar las medidas de saneamiento.

En el estado que fue recibido el proceso puede desprenderse que con ocasión de la nulidad decretada el 26 de mayo de 2021 se excluyó del trámite a la víctima directa de los hechos y nada se dijo sobre sus pretensiones, quedando pendientes las medidas de apoyo para abordar los supuestos de incapacidad y de ausencia total de poder en las que se basó la nulidad; considerándose que se ha pretermitido la instancia al no resolver de fondo el problema jurídico frente a EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA.

En este sentido, se declarará la nulidad de lo actuado desde el auto de 26 de mayo de 2021 que decretó la nulidad, manteniendo vigentes las pruebas que se practicaron en debida forma e instando al Juez para reanudar el trámite con respecto al codemandante y se le garantice su participación en todas las etapas del trámite al punto de definir el litigio y sus pretensiones.

## **DECISIÓN**

### **La SALA SEGUNDA UNTARIA DE DECISIÓN CIVL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

#### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Por las razones expuestas, se declara la nulidad de lo actuado en el proceso por pretermisión de instancia desde el auto del 26 de mayo de 2021 que decretó la nulidad respecto de EDWARD ALONSO RENDÓN TABORDA.

**SEGUNDO:** Las pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso conservan su validez, siempre y cuando hayan sido sometidas a contradicción de todas las partes.

**TERCERO:** Devuélvase el expediente al Despacho de origen.

**NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE.**



**RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ**  
**Magistrado**